

Señor Juez
CARLOS ARTURO GRISALES LEDESMA
Juzgado Quince Administrativo Del Circuito Judicial De Cali
Correo: Of02admcali@Cendoj.Ramajudicial.Gov.Co

La Ciudad.

Asunto: Contestación Demanda

Medio De Control: Reparación Directa
Demandante: Elizabeth Sánchez González Y Otros
Demandado: Nación – Mindefensa – Policía Nacional Y Distrito Especial De Santiago De Cali
Radicación: 76001-33-33-015-2023-00206-00

JULIÁN ANTONIO SANDOVAL JIMÉNEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.130.605.142 de Cali - Valle. y portador de la tarjeta profesional No. 192.457 del C.S.J., actuando en calidad de apoderado judicial del Distrito Especial de Santiago de Cali, según poder especial otorgado por la doctora MARÍA DEL PILAR CANO STERLING identificada con la cédula de ciudadanía número 31.869.025, en su calidad de Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública y de acuerdo con la delegación efectuada mediante el decreto No. 4112.010.20.0024 del 10 de enero de 2020 expedido por el doctor JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 6.342.414 en su condición de Alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali y representante legal del mismo, poder que se anexa al presente escrito por medio del cual; procedo a dar la correspondiente contestación a la demanda por la parte actora.

1. OPORTUNIDAD

Conforme a los anexos de la demanda, el Acta individual de Reparto da cuenta que la misma fue presentada el día 10 de octubre de 2023, la demanda fue admitida Mediante Auto Interlocutorio 4877 y el día 23 de octubre de 2023 mediante comunicación electrónica se surtió la notificación personal de la demanda, Conforme lo anterior, se tiene que el término para contestar la demanda corrió a partir del día 24 de octubre de 2023, y que según lo dispuesto en el mismo auto que admitió la demanda y lo

consignado en los artículos 199 y 200 del CPACA, modificados por los artículos 48 y 50 de la Ley 2080 del 2021, corriendo así los términos para contestar la demanda hasta el día 11 de diciembre de 2023, para lo cual me pronunciare así.

2. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES

2.1 LO QUE SE DEMANDA.

Se presenta demanda en contra del Distrito Especial de Santiago de Cali, en la que relaciona como pretensiones las siguientes:).” (...).”.

“PRIMERA: Se declare la ejecución extrajudicial de NEISON SANCHEZ GONZALEZ, como graves violaciones a los Derechos Humanos por responsabilidad directa de la Policía Nacional y la Alcaldía de Santiago de Cali. SEGUNDA: Como medida de satisfacción y garantía de no repetición, se ordene a la Alcaldía de Santiago de Cali - Secretaria de Gobierno y Secretaría de Seguridad, realizar un informe sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco de manifestaciones públicas efectuadas en el año 2021 bajo el “Paro Nacional”, especificando los casos acaecidos y las unidades policiales especiales a las que pertenecían los uniformados que ocasionaron crímenes, como el ESMAD y el GOES, policía de vigilancia y seguridad ciudadana. Dicho informe debe realizarse a través de la recuperación, conservación y divulgación de las memorias y testimonios plurales de las víctimas, concertación con las demandantes, así como del deber de memoria del Estado y con el acompañamiento técnico de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. TERCERA: Que como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, y con el fin de cumplir los mandatos de los artículos 93 de la Constitución Política y 1.1, 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la sentencia que condene al Estado Colombiano sea trasladada a la Fiscalía General de la Nación, para que esta institución cumpla el deber internacional de investigar y acusar ante los jueces penales de la República a todos los responsables, incluyendo la cadena de mando de las entidades demandadas, por los hechos ocurridos en Cali y, a la Procuraduría General de la Nación, a fin de que de apertura o se tomen decisiones sancionatorias en las investigaciones disciplinarias que se adelanten por la ejecución extrajudicial de NEISON SANCHEZ GONZALEZ. CUARTA: Que se ordene a las entidades demandadas remita copia digital y escrita de la sentencia condenatoria al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que estas entidades públicas en cumplimiento de los mandatos constitucionales y convencionales la pongan en conocimiento de las siguientes instancias: (i) del Relator Especial para las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas que esté encargado de la elaboración de los informes de Colombia, para que se incorpore la información que comprende esta providencia; (ii) a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a fin de que en su informe del país tenga en cuenta esta decisión judicial; (iii) a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que conozca y tome en cuenta en sus



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA

informes del país esta decisión judicial; y, (iv) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de que en su próximo informe sobre lo ocurrido en “el Paro Nacional de 2021” tenga en cuenta esta sentencia. QUINTA: Que, como consecuencia de la declaración anterior, se ordene a la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa - Policía Nacional- y a la Alcaldía de Cali, como medida de satisfacción, realizar un acto de solicitud de reconocimiento de los hechos violentos, arbitrarios y sistemáticos que tuvieron lugar en la comuna 20, sector de Siloé el 4 de mayo del 2021 y, petición de perdón público por estos. Este acto deberá estar encabezado por el Ministro de Defensa, el alcalde de Cali, y el Secretario de Gobierno, junto a los Comandantes de la Policía Metropolitana de Cali, del ESMAD y del GOES que actuaron al momento de los hechos, en donde se reconozca la responsabilidad estatal, haya dignificación de las víctimas y, se comprometan como garantía de no repetición a nunca más cometer este tipo de violaciones y no permitir que otros uniformados lo hagan. Este acto debe ser transmitido por canales institucionales de amplia difusión. SEXTA: Se ordene como medida de satisfacción, a las entidades demandadas la difusión de la sentencia a partir de su publicación en un periódico nacional de amplia circulación y en las instalaciones de cada uno de los despachos de estas, como también, la lectura de un resumen de la misma, transmitido en una emisora de radio regional y en horario de alta sintonía. La anterior debe ser tomada como medida de satisfacción respecto de los derechos a la verdad, la honra y la dignidad por la ejecución extrajudicial de NEISON SANCHEZ GONZALEZ. SÉPTIMA: Como medida de satisfacción con enfoque de reparación simbólica, se ordene a las entidades demandadas se cree un monumento de memoria histórica con el rostros e historia de vida de la víctima mortal NEISON SANCHEZ GONZALEZ y, las demás víctimas del sector de Siloé que estuviesen de acuerdo con el monumento, este deberá contener una placa que resuma los hechos ocurridos declarados en la sentencia y debe ser aprobado por los familiares desde la etapa de diseño y estructuración hasta su entrega. OCTAVA: Como garantía de satisfacción, restitución del buen nombre y garantía de no repetición, se ordene a la Alcaldía distrital de Cali, y a la Policía Nacional se construya en la ciudad de Cali una casa de la memoria, ubicada en un lugar de fácil acceso, de carácter público, y con adecuación para la realización de eventos y actos de conmemoración. Este lugar llevará como nombre el que los y las familiares reconocidos en esta sentencia tengan a bien proponer. NOVENA: Como medida dirigida a garantizar la No Repetición de estos hechos, se ordena a la Nación — Ministerio De Defensa— Policía Nacional, emitir una resolución de obligatorio cumplimiento que ordene la plena prohibición del uso de armamento de fuego en el marco de la atención a la protesta social, al igual que, sea prohibida la actuación del grupo especial GOES dentro de estos operativos. Para esto concertar con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos - OACNUDH en el marco de la cooperación técnica que realiza esta agencia al Estado colombiano: a) la implementación de un mecanismo de formación a la ciudadanía sobre el derecho a la participación ciudadana con los estándares internacionales de protección del derecho a la protesta social y los principios que orientan el uso de la fuerza en escenarios de protesta social. b) la OACNUDH pueda verificar anualmente, sin limitación alguna, en terreno, el cumplimiento de esta medida, y de los estándares internacionales, a través de visitas, recorridos, o formas en que lo decida con sustento técnico. DÉCIMA: Como garantía de no repetición se exhorte a la Nación - Fiscalía General de la Nación - Cuerpo Técnico de



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA

Investigaciones, implemente el Protocolo de Minnesota en las investigaciones que se adelante por muertes ocasionadas en contexto de protesta social. Para dicha labor deberá concertar el apoyo técnico a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos - OACNUDH. DÉCIMA PRIMERA: Se condene a la PARTE DEMANDADA al pago de los costos con ocasión de las pretensiones anteriormente expuestas, y a las Agencias en Derecho, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No 1887 de 26 de junio de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, Capítulo III, Numeral 3.1.2. DÉCIMA SEGUNDA: Las sumas a que resulte condenada la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa - Policía Nacional- , Alcaldía de Cali, Secretaría de Seguridad, serán actualizadas de conformidad con lo previsto en la ley 1437 de 2011 y se reconocerán los intereses correspondientes liquidados conforme a la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, contados desde la fecha de la ocurrencia de los hechos hasta cuando se dé cumplimiento de la sentencia, es decir, al pago efectivo de esta suma por parte de las autoridades responsables. Igual tratamiento se dará a las sumas acordadas en acuerdo conciliatorio desde la ocurrencia de los hechos hasta el cumplimiento del mismo. DÉCIMA TERCERA: Se ordene a las demandadas a que, luego de ejecutoriado el fallo y como cumplimiento de los principios de moralidad pública y protección de los recursos de la Nación, de manera inmediata, den inicio a las acciones de repetición contra los integrantes de Policía Nacional, GOES y ESMAD que generaron el daño, bien sea de forma directa, mediata o por el incumplimiento de sus deberes de control y mando, para que resarza al presupuesto nacional de la totalidad de pagos hechos a los demandantes. DÉCIMA CUARTA: Se condena a las demandadas a pagar las costas originadas dentro del presente proceso. DÉCIMA QUINTA: Las demandadas darán cumplimiento a la decisión en los términos de los artículos 187, 189 y 192 de la Ley 1437 de 2011(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo). DÉCIMA SEXTA: Declárase a la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa -Policía Nacional y Alcaldía de Santiago de Cali - Secretaria de Gobierno y Secretaría de Seguridad, responsables administrativamente de todos los daños y perjuicios tanto materiales y/o patrimoniales, como extrapatrimoniales (perjuicios o daños morales subjetivos y por la afectación relevante a bienes o derechos constitucionales y convencionalmente protegidos) ocasionados a ELIZABETH SANCHEZ GONZALEZ y otros , por la ejecución extrajudicial de NEISON SANCHEZ GONZALEZ, cometida por integrantes de la Policía Nacional en el contexto de las manifestaciones públicas efectuadas en el marco del paro nacional de 2021, específicamente las presentadas el día 4 de mayo de 2021 en Siloé, en la ciudad de Cali. DÉCIMA SÉPTIMA: Como consecuencia de la declaración de responsabilidad, condénese a la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa -Policía Nacional y Alcaldía de Santiago de Cali - Secretaria de Gobierno y Secretaría de Seguridad y Justicia, a pagarles a los demandantes por concepto de daños o perjuicios materiales y/o patrimoniales las sumas económicas que se demuestren en el proceso, por la ejecución extrajudicial de NEISON SANCHEZ GONZALEZ. La condena de los perjuicios materiales resultará de la cuantía de las bases demostradas en el proceso, reajustada en la fecha de ejecutoria de la providencia que la imponga. Igualmente, se deben pagar los intereses compensatorios de las sumas que por este concepto se condenen, desde el día 4 de mayo del 2021 hasta la fecha de ejecutoria de la providencia, y el pago de intereses moratorios desde la fecha de ejecutoria de la providencia hasta el día del pago efectivo por parte de las autoridades responsables. Demandantes



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA

relacionados como familiares de la víctima Nelson Sánchez González. Teniendo en cuenta el carácter conciliatorio de esta etapa, se presenta un monto mínimo de la pretensión respecto de los perjuicios materiales o patrimoniales con las siguientes liquidaciones: a. Daño Emergente para la demandante. A favor de ELIZABETH SANCHEZ GONZALEZ, por concepto de gastos notariales, judiciales y honorarios de profesionales que participan en la efectividad de los derechos a la Verdad y a la Justicia, traslados de familiares a las diligencias ante despachos judiciales, entre otros, la suma equivalente a setenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (70 SMLMV)- b. Lucro Cesante para los demandantes. Por los ingresos dejados de percibir luego de la ejecución extrajudicial de NEISON SANCHEZ GONZALEZ dado que, al momento de los hechos era una persona en edad productiva y se encontraba en etapa laboral, sin perjuicio de que se pruebe durante el proceso el monto total de ingresos dejados de percibir por la afectación en esta materia, se solicita, a favor de ELIZABETH SANCHEZ GONZALEZ 500 S.M.M.L.V PARA UN TOTAL POR PERJUICIOS MATERIALES/PATRIMONIALES DE 570 S.M.M.L.V- DÉCIMA OCTAVA: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, condénese a la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y a la Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaria de Gobierno y Secretaría de Seguridad y Justicia a pagar a los demandantes perjuicios inmateriales, a causa del daño moral causado por la ejecución extrajudicial de NEISON SÁNCHEZ GONZÁLEZ. A ELIZABETH SANCHEZ GONZALEZ quien actúa en nombre propio como madre de NEISON SANCHEZ GONZALEZ (Q.E.P.D.) TRESCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES 300 S.M.M.L.V. A ANGIE CAROLAY SANCHEZ GONZALEZ quien actúa en nombre propio y en calidad de hermana de NEISON SANCHEZ GONZALEZ (Q.E.P.D.) CIENTO CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES 150 S.M.M.L.V. 10 A MARIA PAOLA SANCHEZ GONZALEZ quien actúa en nombre propio y en calidad de hermana de NEISON SANCHEZ GONZALEZ (Q.E.P.D.) CIENTO CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES 150 S.M.M.L.V. DARWIN STEVEN SÁNCHEZ quien actúa en nombre propio y en calidad de hermano de NEISON SANCHEZ GONZALEZ (Q.E.P.D.) CIENTO CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES 150 S.M.M.L.V. ALBA ROSA BARONA SANCHEZ quien actúa en nombre propio y en calidad de hermana de NEISON SANCHEZ GONZALEZ (Q.E.P.D.) CIENTO CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES 150 S.M.M.L.V. --POR UN TOTAL POR PERJUICIO MORAL DE 900 S.M.M.L.V.-- La liquidación del perjuicio moral se hará con base en el salario mínimo mensual legal vigente al momento de ejecución de la sentencia

Nos oponemos a todas y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda, esto es, que se declare patrimonialmente responsable al Distrito Especial de Santiago de Cali, por el fallecimiento del señor NEISON SÁNCHEZ GONZÁLEZ (Q.E.P.D) que se menciona en la demanda ocurrió en la protesta social del 4 de mayo de 2021 de la ciudad de Cali.

De cualquier manera, ante una eventual sentencia desfavorable contra el Distrito Especial de Santiago de Cali, la llamada a hacerse cargo de las condenas:

Finalmente su señoría, de cualquier manera ante una eventual sentencia desfavorable en contra del Distrito Especial de Santiago de Cali, la llamada a hacerse cargo de la condena es la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, identificada con el Nit. 860.524.654-6, toda vez que con dicha entidad el Distrito Especial de Santiago de Cali suscribió la póliza No. 420-80-994000000181 del 22 de julio de 2020. La referida póliza cubre cualquier tipo de responsabilidad extracontractual ocasionada por siniestros acaecidos entre el 23 de junio de 2020 hasta el 19 de mayo de 2021, incluyendo amparar los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales incluyendo los perjuicios morales y de vida en relación y el lucro cesante, que cause a terceros el asegurado, Para tales afectos, con la presente contestación de demanda también se formula demanda de llamamiento en garantía contra la sociedad aseguradora.

3. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS.

AL HECHO PRIMERO: NO LE CONSTA A MI REPRESENTADA.

Al Distrito Especial de Santiago de Cali no le consta las afirmaciones de la parte demandantes, téngase a lo probado dentro del expediente. Este es un hecho que le corresponde probar a la parte demandante en el transcurso del proceso y únicamente se tiene a lo allegado en el expediente

AL HECHO SEGUNDO: NO LE CONSTA A MI REPRESENTADA.

Al Distrito Especial de Santiago de Cali no le consta las afirmaciones de la parte demandantes, téngase a lo probado dentro del expediente. Este es un hecho que le corresponde probar a la parte demandante en el transcurso del proceso y únicamente se tiene a lo allegado en el expediente.

AL HECHO TERCERO: NO LE CONSTA A MI REPRESENTADA.

Al Distrito Especial de Santiago de Cali no le consta las afirmaciones de la parte demandantes, téngase a lo probado dentro del expediente. Este es un hecho que le corresponde probar a la parte demandante en el transcurso del proceso y únicamente se tiene a lo allegado en el expediente

AL HECHO CUARTO: NO LE CONSTA A MI REPRESENTADA.

Al Distrito Especial de Santiago de Cali no le consta las afirmaciones de la parte demandante, téngase a lo probado dentro del expediente.

4. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DE LA DEFENSA.

Se alega la responsabilidad administrativa del Estado Colombiano, en específico, de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Alcaldía de Santiago de Cali - Secretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad y Justicia, por las fallas en el servicio de seguridad ciudadana por acción y omisión de la actividad policial o, por riesgo excepcional o, la que adecue y corresponda a criterio del Despacho, por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos que ocasionaron daños a los demandantes con la ejecución extrajudicial (homicidio) de NEISON SÁNCHEZ GONZÁLEZ víctima de los operativos policiales adelantados por las entidades convocadas, el 4 de mayo de 2021 en el sector de Siloé, comuna 20, en la ciudad de Santiago de Cali, teniendo como contexto de ataques indiscriminados a las manifestaciones públicas que se presentaron en todo el territorio nacional, cuando ejercían sus derechos constitucionales a la libertad de expresión, manifestación y a la protesta, conocido como el “Paro Nacional de 2021 o estallido social”.

DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTESTA SOCIAL Y PACIFICA

La reunión y la manifestación pacífica en espacios públicos y, específicamente, la protesta en el régimen constitucional *“constituyen un mecanismo útil para la democracia y para lograr el cumplimiento cabal del pacto social, pues es a través de estos medios de participación que muchas veces se expresan las inconformidades ciudadanas de grupos sociales que no han sido escuchados institucionalmente”*

La protesta social es un derecho fundamental que incluye el derecho a la expresión individual y colectiva en espacios públicos y que está reconocido en la Constitución Política de 1991. Los artículos 20, 37 y 38 de la Constitución reconocen la protesta como expresión y materialización del derecho a la libre expresión, a la reunión y manifestación. Así, el artículo 20 garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones. El artículo 37, por su parte, consagró que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente y que será únicamente la ley la que pueda establecer los casos en los que se podrá limitar el ejercicio de este derecho. A su turno, el artículo 38 garantiza el derecho a la libre



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA

asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. En el ámbito internacional, diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, han protegido el derecho a la protesta. En ese sentido, el artículo 208 de la Declaración Universal de Derechos Humanos prevé que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

De igual manera, el pacto internacional de derechos civiles y políticos prevé en el artículo 21 el reconocimiento del derecho a la reunión pacífica y dispone que el ejercicio de ese derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones que prevea la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

A su turno, el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, establece que los Estados partes *“se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: (...) ix) El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas (...)”*.

El derecho a la protesta social, asimismo, está garantizado en la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, que en el artículo 15 *“reconoce el derecho a la reunión pacífica y sin armas”* y prescribe que sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas en la ley, necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o el orden públicos o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

ASPECTOS JURIDICOS PREVIOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO Y EL RESTABLECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA DEL ORDEN PUBLICO, COMO LAS QUE SE OCASIONARON EN EL MES DE MAYO DE 2021.

La Constitución Política reza en su artículo 2o, que dentro de los fines esenciales del Estado: [...], *‘Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares’*.



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA

En sentencia C-128 de 20183, la Corte Constitucional ha definido el concepto de orden público como: *"El conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos, debe completarse con el medio ambiente sano, como soporte del adecuado desenvolvimiento de la vida en sociedad. En este sentido, el orden público debe definirse como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de sanidad medioambiental, necesarias para la convivencia y la vigencia de los derechos constitucionales, al amparo del principio de dignidad humana."*

De conformidad con el artículo 296 de la Constitución Política, para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes.

En este mismo orden de ideas, de conformidad con el artículo 303 de la Constitución Política el gobernador será agente del presidente la República para el mantenimiento de orden público.

Asimismo, el artículo 315 de la Constitución Política señala como atribución de los alcaldes conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del presidente la República.

De igual manera, el artículo 91 la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de Ley 1551 de 2012 señala que los alcaldes ejercerán las funciones que les asignan la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo, y en relación con el orden público deberán conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del presidente la República y del respectivo gobernador.

De conformidad con el artículo 198 la Ley 1801 de 2016 son autoridades policía, entre otros, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes distritales o municipales.

En este orden ideas, tal como lo señala el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, es atribución del presidente de la República: (i) ejercer la función de Policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y los deberes, de acuerdo a la Constitución y la ley; (ii) tomar las medidas que considere necesarias para garantizar la convivencia en el territorio nacional, en el marco la Constitución, la ley y



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA

el Código Nacional Seguridad y Convivencia Ciudadana; e (iii) impartir instrucciones a los alcaldes y gobernadores para preservar y restablecer la convivencia. De conformidad con los artículos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016, corresponde a los gobernadores y alcaldes ejecutar las instrucciones del presidente de la República en relación con el mantenimiento y restablecimiento la convivencia. De acuerdo con lo establecido, en los artículos 5 y 6 de la Ley 1801 de 2016 se entiende por convivencia, la interacción pacífica, y armónica entre las personas, con los bienes, y con ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico, y señala como categorías jurídicas las siguientes: (i) Seguridad: garantizar la protección de los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional.

(ii) Tranquilidad: lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de los mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos. (iii) Ambiente: favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente y (iv) Salud Pública: es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de condiciones bienestar y calidad de vida.

El artículo 209 ibídem consagra *que* la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

LA FALLA DEL SERVICIO DEBE SER PLENAMENTE ACREDITADA POR PARTE DE LOS DEMANDANTES.-

Sobre la necesidad de probar la falla del servicio, dentro del régimen del artículo 90º de la Constitución Nacional, el Consejo de Estado, en reiterada Jurisprudencia, se ha referido a la necesidad de probar la falla del servicio de la Administración, en sentencia del 5 de agosto de 1994, proceso No. 8487, con ponencia del Consejero Carlos Betancur Jaramillo, se dijo:

“1. En casos como el presente, en los cuales se imputa la responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde,



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA

o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada o lo que es lo mismo, de una FALLA EN EL SERVICIO.

*“ La noción de la falla del servicio no desaparece, como lo ha señalado la Sala, de la responsabilidad estatal fundada en el citado artículo 90° de la Carta. Cuando de ella se derive la responsabilidad que se imputa a la administración se constituye en un elemento **que debe ser acreditado por el demandante**. Así lo ha repetido esta misma Sala.*

“En otros términos, el daño es antijurídico no sólo cuando la administración que lo causa actúa irregularmente, sino cuando esa conducta lesiva esté ajustada al ordenamiento.

“Pero decir antijurídico no quiere significar que la noción de falta o falla del servicio desapareció de la responsabilidad estatal y menos que el acreedor de la indemnización ya no tenga que probar la falla si la hubo o la conducta irregular que lo lesionó.

“En otras palabras, cuando se alega que la conducta irregular de la administración produjo el daño (la falla del servicio en el lenguaje corriente) tendrá que probarse esa irregularidad, salvedad hecha de los eventos en que esa falla se presume. En ambas hipótesis ese primer presupuesto de la responsabilidad deberá gobernarse por las reglas de carga probatoria. Y cuando se afirma que ese daño se produjo sin falta o falla de la administración, pero el que lo sufre no tenía por qué soportarlo, el acreedor, como es apenas lógico, deberá demostrar el daño y por qué pese a ser legal la actuación de la administración, no tenía por qué sufrirlo.

“En síntesis, la nueva constitución, a pesar de su amplitud en materia de responsabilidad, no la hizo exclusivamente objetiva ni borró del ordenamiento la responsabilidad por falla del servicio. Las nociones de imputabilidad y de daño antijurídico así lo dan a entender” (Sentencia del 25 de febrero de 1993. Ponente. Carlos Betancur Jaramillo. Expediente 7742).

En segundo lugar, estima la Sala que para que, en estos casos pueda afirmarse que se presenta la falla del servicio, resulta necesario determinar el alcance de la obligación estatal que se denuncia como incumplida o como cumplida defectuosamente, debiendo orientarse esta determinación hacia la noción relativa de este concepto elaborada por la doctrina y adoptada por la jurisprudencia.

Tal concepto implica, como lo ha dicho repetidamente la Sala, que la responsabilidad de la Administración no puede resultar comprometida cada vez que un particular resulta lesionado en su “vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”, para

cuya protección están establecidas las autoridades de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º de la Constitución, pues el examen del cumplimiento adecuado de las obligaciones del Estado no puede hacerse con relación a la que se impone tal obligación, teniendo en cuenta sus recursos, sus capacidades y sus posibilidades y sin que pueda olvidarse que nadie, tampoco el Estado, puede ser obligado a lo imposible.

Nexo causal:

Este elemento resulta de vital importancia para que surja la responsabilidad, el cual debe darse en forma manifiesta y precisa entre el hecho y el daño. En este caso reiteramos que, al Municipio de Santiago de Cali, no tiene responsabilidad alguna frente a los hechos materia de la presente convocatoria.

*Y es aquí donde debemos tener en cuenta la teoría de la causalidad adecuada, la cual sostiene que no todas las condiciones que concurren a un resultado adquieren la categoría de causas que originen la responsabilidad. **Hay que separar, escoger, aquellos fenómenos, circunstancias, hechos que realmente fueron determinantes e influyeron en el resultado.***

*En este caso el resultado dañoso que se pudo haber ocasionado presenta que es como consecuencia del **hecho de un tercero**, lo cual rompe necesariamente con el nexo causal que la parte convocante le pretende endilgar a la municipalidad por la falta o falla del servicio*

. 5. EXCEPCIONES PARA PROPONER

5.1 FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

Código General del Proceso Ley 1564 de 2012

ARTÍCULO 132. CONTROL DE LEGALIDAD. Agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación.

Ahora bien, la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferida dentro del proceso con radicación número 76001-23-31-000-1993-0090-01 (14452) CP: María

Elena Giraldo Gómez: Reinaldo Posso García y otros vs Ministerio de Transporte – INVIAS, en dicha jurisprudencia indico:

“Como se ha indicado, en varias oportunidades la legitimación en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina y para los juicios de cognición desde dos puntos de vista: de hecho y material. Por la primera, legitimación de hecho en la causa, se entiende la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, es una relación jurídica nacida de una conducta, en la demanda y de la notificación de esta al demandado, quien cita a otro y le atribuye es legitimado de hecho y por activa y a quien cita y le atribuye esta legitimado de hecho y por pasiva. En cambio la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Es decir, todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues solo están legitimado materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la demanda”

De manera que, en la falta de legitimación en la causal material solo se estudia si existe o no relación real de la parte demandado o demandante con la pretensión que se le atribuye o la defensa que se hace respectivamente. Dado lo cual, la Administración Municipal se debe oponer a la prosperidad de las pretensiones de la parte demandante, debido a que el Municipio no esta legitimado en la causa por pasiva para asumir responsabilidad alguna ante la ausencia de una relación de responsabilidad de esta entidad directa o indirectamente con el daño que tuvo origen en la ocurrencia de los hechos que dieron lugar al presente tramite procesal.

Al observarse las pruebas anexas a la demanda se encuentra que no existe caudal probatorio idóneo y suficiente que permita realizar un estudio profundo del caso, respecto de las implicaciones que pudiese tener la entidad territorial en los hechos expuestos.

Es la Nación a través del Sr. Presidente de la Republica y del Ministerio de Defensa – Policía Nacional, quienes tienen y ostentan las competencias desde el ámbito constitucional y legal para restablecer el orden público en los lugares de la nación donde el mismo se encuentre turbado.

De lo anterior, se concluye que no se encuentran elementos de juicio que permitan concluir la responsabilidad y obligación de resarcir perjuicios por parte del Distrito

Especial de Santiago de Cali, frente a una eventual falla del servicio. No se evidencia ninguna contrariedad a la ley, a pesar de los argumentos que expone el demandante, hay suficiente evidencia para demostrar que sus dichos no corresponden a la realidad procesal.

Porque el Distrito Especial De Santiago De Cali carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que si bien es cierto el alcalde Distrital de Santiago de Cali, es la primera autoridad de Policía dentro del Municipio, dentro de sus obligaciones legales y reglamentarias, no se encuentra definida la prestación del servicio de seguridad y/o protección a los habitantes del territorio, misma que refuta como incumplido por el extremo activo, por la lesión y muerte al señor NEISON SÁNCHEZ GONZÁLEZ (Q.E.P.D.).

No obstante, desconoce dicho extremo de la Litis, que al Distrito Especial de Santiago de Cali no le compete, desde el marco de sus funciones y atribuciones asignadas, velar por la seguridad e integridad física de los habitantes de su territorio, ya que de estos asuntos se encarga la Nación- Ministerio de Defensa-Policía Nacional, como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, la cual fue instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, tal como lo refrenda el artículo 1° de la Ley 62 de 1993, reglamentado por el Decreto Nacional 1028 de 1994:

“ARTICULO 1° Finalidad. La Policía Nacional, como parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.”
(subrayado fuera de texto)

En estos términos, no queda mas que dicho que el deber de protección y seguridad, refutado como incumplido por los demandantes, se encuentra asignado legal y reglamentariamente a otra institución totalmente diferente al Distrito Especial de Santiago de Cali, valga decir, a la **Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional** por ser quien posee, como lo indica la norma previamente citada, un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, con capacidad de preservar los derechos y libertades de las personas en el territorio colombiano y asegurar una convivencia pacífica.

No existe plena prueba demostrativa sobre los daños que se alegan como imputable al Distrito de Santiago de Cali por la muerte violenta del señor NEISON SÁNCHEZ GONZÁLEZ (Q.E.P.D.).

- 1) Inexistencia del título de imputación “Falla del Servicio” contra el Distrito de Santiago de Cali.

5.2 HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO

En definitiva, la causal eximente **de responsabilidad de la culpa exclusiva de un tercero de la falta legitimación** y en consecuencia la excepción de la “Falta de Legitimación en la Causa Por Pasiva”, será la causal y excepción principal que se explicará e invocará por parte del Distrito Especial de Santiago de Cali, para el evento materia de la presente demanda.

No existe plena prueba demostrativa sobre la intervención de las autoridades del distrito en los hechos Como quiera que los hechos materia de la presente demanda, necesariamente están en conocimiento ante el organismo judicial competente como lo es la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** y el mismo en poder realizar un análisis más amplio del caso, es en esta sede el establecer las correspondientes responsabilidades.

En el entendido de que los hechos referidos son actualmente materia de investigación por parte de las autoridades instituidas para tal fin como lo es la Fiscalía General de la Nación, según se desprende con el denuncia formulado (anexo), según el formato único de noticia criminal FPJ-2 en el presente evento, nos encontramos frente a un hecho ajeno a la administración, esto es ante el **hecho de un tercero**, quienes deben ser los que asuman las consecuencias de sus actos. Esto es frente a la causal eximente de responsabilidad de la “**Culpa exclusiva de un tercero**”.

Es dicho organismo judicial **fiscalía general de la Nación**, quienes deberán determinar e identificar plenamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de los hechos materia de denuncia, del delito y de la reparación de los daños y de los perjuicios causados a los demandantes.

Del análisis de acervo probatorio anteriormente allegado al proceso, se puede concluir que **NO** existen en el plenario, pruebas suficientes e idóneas “**INEXISTENCIA**”

SUFICIENTE DE PRUEBAS”, que permitan evidenciar y establecer los hechos precisos de la manera como habrían ocurrido y en tal caso el nexo causal entre el daño y la causa eficiente del mismo no se encuentra probado. Es decir que aunque el daño existiere, no le puede ser atribuible a la entidad demandada.

5.3 INNOMINADA O GENÉRICA.

Solicito muy respetuosamente al momento de proferir sentencia, se sirva declarar de oficio todos los hechos exceptivos que sean advertidos y probados en el curso del proceso y que resulten favorables a la entidad que represento

6. ANEXOS

6.1 poder especial, amplio y suficiente al Abogado JULIAN ANTONIO SANDOVAL JIMENEZ identificado con la cedula de ciudadanía número 1.130.605.142 abogado titulado con Tarjeta Profesional número 192.457 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en nombre y representación del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali. (02 folios útiles).

6.2 anexos del poder. (24 folios útiles).

9. NOTIFICACIONES

Las del señor Alcalde, se recibirán en el piso 9° del Centro Administrativo Municipal CAM —

Torre Alcaldía y al correo electrónico de notificación oficial: notificacionesjudicialescali.gov.co.

Autorizo notificarme a mi correo electrónico registrado en el registro nacional de abogados jurídica.antonio.sandoval@hotmail.com

Atentamente,



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA

Julian Antonio Sandoval Jiménez
Abogado Apoderado Judicial Distrito Especial de Cali.
CC. 1.130.605.142
TP. 192.457 del C. S de la J.
Correo electrónico: juridica.antonio.sandoval@hotmail.com (RNA)
Teléfono: 3002900128